

El papel de las entidades de acción social en el estado del bienestar

- Por Carmen Martínez Perza. Vicepresidenta de UNAD -



LA RED DE ATENCIÓN
A LAS ADICCIONES

1.- La Red UNAD, parte del Tercer Sector, tiene en la defensa del estado del bienestar su ADN y cree en la intervención pública como herramienta de igualdad.

El estado del bienestar reconoce los derechos sociales, reconocimiento que fundamenta obligaciones positivas, por parte del Estado, a través de prestaciones públicas dirigidas a equilibrar situaciones de desigualdad, y ello, en la búsqueda de que la igualdad proclamada en la Constitución y los Tratados Internacionales sea real y no se quede en declaraciones rimbombantes que llenan los textos legales pero que están vacías de contenido.

Las prestaciones sanitarias, educativas y sociales son básicas en este marco de *lo público*, donde ejerce un papel fundamental lo que se conoce como discriminación positiva, que implica prestar apoyos concretos y específicos a determinados grupos poblacionales con especiales dificultades, por ejemplo, personas en desempleo, con discapacidad, en situación de pobreza o de calle, familias monoparentales, mujeres víctimas de violencia de género, inmigrantes irregulares o personas con adicciones.

UNAD defiende que exista una inversión pública suficiente acorde con las necesidades sociales de los grupos más vulnerables. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos sociales, educativos y sanitarios de la población y la administración pública es la encargada de cumplir esta tarea, estableciendo las políticas más adecuadas y controlando su ejecución correcta sin desviaciones indeseadas sirviéndose, para cumplir con esa misión, de sus propios recursos materiales y humanos, así como de los recursos de la propia comunidad a quien sirve.

2.- Las entidades del tercer sector de acción social nacen de las necesidades de las personas más vulnerables de la sociedad y de la insuficiencia del aparato administrativo del Estado para detectarlas y para satisfacerlas plenamente en determinados momentos históricos.

Con el nacimiento de la democracia, tras 40 años de dictadura, en España se instala el modelo de estado del bienestar en un país lleno de desigualdades sociales y de analfabetismo, con las consecuentes necesidades de intervención como contrapartida. Se construye una sanidad pública universal de altas prestaciones y se invierte en la educación pública obligatoria, ofreciendo servicios a todas las personas en igualdad de condiciones, con independencia de su poder adquisitivo.

El Estado se vertebra en diversos niveles administrativos para gestionar estos servicios, principalmente Gobierno Central, Comunidades Autónomas y gobiernos locales, que requieren de un gran aparataje burocrático e ingentes inversiones.

También los Servicios Sociales comienzan a desarrollarse, si bien en este caso la administración asume directamente algunas prestaciones, pero no llega a cubrir todas las necesidades propias de la sociedad capitalista, que genera manifiestas, e incluso crecientes, desigualdades.

En esta situación, es la propia iniciativa ciudadana, esa que surge de las entrañas mismas de la sociedad y a menudo del sufrimiento en propia carne, la que acude en defensa de los derechos de las personas más excluidas, poniendo de manifiesto las realidades injustas, ignoradas o silenciadas, reivindicando la creación de los servicios públicos necesarios para atenderlas y prestando servicios directamente ante la ausencia de respuesta de la administración pública a estas necesidades, sin duda, de responsabilidad pública. Esto sucedió, por ejemplo, en relación con la pobreza, la discapacidad, las adicciones, la inmigración, el encarcelamiento masivo de sectores excluidos, etc.

Así, desde el compromiso con la Justicia Social, desde la militancia por una sociedad más igualitaria e inclusiva y desde la defensa de derechos sociales, nació en el Estado español lo que se conoce como Tercer Sector de Acción Social, que hoy en día cuenta con 28.000 entidades, 577.000 profesionales asalariadas (3% del total de personas asalariadas) y más de 1.000.000 de voluntarias dedicadas a atender a las personas, con casi 43 millones de atenciones directas al año.

En la construcción del estado del bienestar, la iniciativa del Tercer Sector de Acción Social ha sido clave en España.

En concreto, la red UNAD surge en la década de los ochenta, un momento histórico en el que las personas con adicciones morían en las calles, estaban expuestas a graves enfermedades como el VIH-Sida y la Hepatitis C o eran encarceladas, sin que se ofreciera desde el Estado una atención adecuada a su problemática sociosanitaria. UNAD nació reivindicando servicios públicos dignos para este colectivo, así como mejoras legislativas que evitaran la criminalización de las personas con problemas de drogodependencias y el establecimiento de estrategias políticas suficientes para abordar esta problemática social. Además de esto, la red UNAD, a través de sus colectivos ciudadanos, se vio abocada a prestar, por toda la geografía española, los servicios sociosanitarios que la administración no prestaba, y lo hizo desde la propia comunidad donde surgían los problemas, desde el conocimiento directo, desde la cercanía, el acompañamiento y el respeto de estas personas vulnerables.

3.- Las últimas décadas han estado marcadas por los recortes en inversión social, sanidad y educación.

En las últimas décadas las tendencias neoliberales imperantes están impulsando un vaciamiento del estado de bienestar, ofreciéndose la empresa privada (con exclusivos intereses lucrativos particulares) como la sustitutiva del Estado prestador de servicios. En España, de manera más destacable desde la crisis de 2008, tanto el Gobierno central como los autonómicos han llevado a cabo importantes recortes en los servicios más básicos del estado del bienestar tales como Educación, Sanidad y Servicios sociales, recortes que, sin duda, han puesto en peor situación a las personas más desfavorecidas y con menos recursos económicos, mientras que ha beneficiado a las grandes fortunas, a las grandes empresas y al sector financiero con suculentas aportaciones directas y con rebajas de impuestos.

Así lo puso de manifiesto a principios de 2020 el *Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos* en un primer avance de su informe sobre nuestro país, en el que destacó el grave aumento de la desigualdad en España tras la gestión de la crisis de 2008, con la consecuente concentración del poder económico cada vez en menos manos.

Lo ocurrido durante la pandemia y las consecuencias que se avecinan han dejado claro que la gestión de aquella crisis no fue acertada y que hay que reforzar los servicios públicos sanitarios, sociales y, por supuesto, educativos.

4.- Defender lo público no equivale a una gestión directa de todos los servicios sociales por parte de las administraciones.

La administración tiene la responsabilidad del diseño, desarrollo y evaluación de las políticas públicas con la puesta en marcha de los servicios públicos necesarios para reducir las desigualdades. Las ONG de acción social, por su parte, pueden colaborar en la prestación concreta de determinados servicios que la administración no puede prestar por razones diversas. En el marco de esta participación del Tercer Sector en la prestación de servicios públicos se deberá contar en todo caso con su control férreo por el Estado como garante de un buen funcionamiento.

El camino de la igualdad real desde lo público, de la transformación hacia una sociedad más justa, no consiste en construir gigantes administrativos cargados de lenta burocracia y de procedimientos actuariales inoperativos y alejados de la gente y de las realidades más duras. Hemos de mantener equilibrios en el estado del bienestar, contando con una administración responsable de los servicios públicos capaz de responder con agilidad y eficiencia a las necesidades sociales y, en esto, las entidades del Tercer Sector tienen un papel fundamental de complementariedad y colaboración.

Por eso no se puede identificar la privatización de servicios públicos, impulsada por las tendencias neoliberales e íntimamente unida al vaciamiento del estado del bienestar, con la colaboración de las entidades sociales y de economía social en la prestación y promoción de los servicios públicos de intervención social.

La red UNAD, que en la actualidad cuenta con 211 entidades, 4400 profesionales y 4400 voluntarios/as y atiende a 88.000 personas: A) Continúa con esa vocación de defensa de derechos como instrumento de transformación social por la mejora de la atención y las condiciones de las personas con adicciones, promoviendo políticas públicas adecuadas y proponiendo leyes más justas; B) Sigue aportando su experiencia, sus saberes acumulados, su compromiso, sus valores y sus recursos humanos y materiales, en la prestación de servicios públicos en colaboración con el Estado, complementando su labor; C) Nuestros valores comunes son el compromiso, la participación, la adaptación, la calidad y la cooperación; D) Tenemos como misión defender derechos, ofrecer servicios de calidad y mejorar la vida de las personas con drogodependencias y sus familias.

UNAD no sólo cree en *lo público*, sino que exige a los gobiernos de turno, central, autonómicos y locales, el mantenimiento y mayor dotación de unos servicios públicos encaminados a mejorar la situación de los colectivos más vulnerables y olvidados, especialmente el de las personas con problemas de drogodependencias. Desde hace décadas UNAD denuncia el vaciamiento progresivo del estado del bienestar y pide de manera insistente presupuestos sociales justos y suficientes.

5.- Las acciones de las entidades sociales que trabajan por la justicia social se sustentan en los valores de justicia, igualdad, solidaridad y compromiso y nunca son rentables económicamente.

A diferencia de la empresa mercantil, cuyo principal fin es conseguir el máximo de beneficio económico al menor coste posible, las entidades del tercer sector persiguen un conjunto de beneficios muy distintos al objetivo lucrativo, beneficios que podemos englobar en lo que se denomina rentabilidad social. El Estado debe evitar a toda costa convertir el dolor humano en un negocio y, por tanto, no puede vender la prestación de servicios sociales a quien lo haga al menor precio a costa de su calidad y, por ende, a costa del bienestar o sufrimiento de las personas con especiales necesidades de apoyo.

Tal como señala la Plataforma del Tercer Sector, que aglutina a las entidades de todo el Estado, su actividad, la de sus organizaciones y de las personas que lo componen, nacen del compromiso en la defensa de los derechos humanos y la prestación de servicios sociales y descansa en los valores de democracia participativa, solidaridad, igualdad de oportunidades, inclusión, y transparencia. El ejercicio de estos valores conduce a un desarrollo social equilibrado, a la cohesión social y a un modelo de organización en el que la actividad económica está al servicio de la ciudadanía.

En el sector de las drogodependencias fue la iniciativa ciudadana, principalmente a través de las ONG integradas en UNAD, la que, desde finales de los 80, tuvo que crear los recursos de atención que no existían. Así, actuando siempre como avanzadilla y amparándose en el conocimiento directo, se crearon comunidades terapéuticas, centros de tratamiento ambulatorio, centros de día, programas de reducción del daño, de inserción laboral, de asesoramiento jurídico especializado, etc. En muchos casos, su impulso y su fuerza propositiva e innovadora logró avances hoy en día incuestionables como la prescripción de metadona o los tratamientos de adicciones en los centros penitenciarios.

A día de hoy, la Red UNAD cuenta con más de cien centros de tratamiento ambulatorio, cerca de 75 centros de día y otros tantos centros de acogida, medio centenar de comunidades terapéuticas, así como de pisos o viviendas, en torno a 40 centros formativos y 30 recursos dedicados a la reducción de daños, además de una docena de empresas de reinserción y varias unidades móviles y hospitalarias.

6.- Las entidades del Tercer Sector de Acción Social son a los grupos desfavorecidos lo que los sindicatos a la clase trabajadora y la economía social a una forma de economía más solidaria y comprometida.

Los problemas sociales son tan variados y cambiantes que siempre va a ser necesaria la iniciativa social para construir igualdad, para reivindicar derechos, para denunciar discriminaciones y desigualdades y para prestar servicios que no prestan las administraciones. A través de la participación ciudadana y del tejido asociativo, la democracia adquiere un sentido más auténtico, que va más allá de acudir a las urnas periódicamente, porque sirven de canal de comunicación permanente entre la ciudadanía y las administraciones públicas, poniendo sobre la mesa las realidades y las necesidades de las clases desfavorecidas y aportando posibles soluciones.

El papel de las entidades del Tercer Sector de acción social es equivalente y tan necesario para mejorar la situación de las personas más vulnerables como lo es el de los sindicatos para defender a los y las trabajadoras de la inercia explotadora de las sociedades neoliberales y como lo es la economía social en la búsqueda de una economía más solidaria, distributiva y comprometida con su entorno más cercano.

Estos tres agentes sociales han de ir de la mano en la construcción de una sociedad más justa y en la promoción y defensa de lo público, así como en la necesidad de reconocimiento y apoyo firme por el Estado. En este sentido, tenemos que reclamar a los poderes públicos que se invierta más en materia social y que se ponga fin a la infradotación presupuestaria que sufre este sector de manera endémica en España.

En este sentido, invitamos a los sindicatos y a las empresas de economía social a trabajar juntos y juntas en este reto ante la debacle neoliberal a la que asistimos desde hace

décadas, porque en esta tarea de transformación social no podemos olvidar, no sólo a quienes trabajan por cuenta ajena, sino tampoco a las personas más desfavorecidas ni a quienes participan en la economía social. Juntos estos tres sectores, su potencial transformador es imparable.

UNAD y sus entidades han impulsado desde principios de los 90 cambios legislativos en materia penal para promover la descriminalización de las personas drogodependientes que delinquen a causa de su adicción y para mejorar y ampliar nuestro sistema de alternativas a la prisión, más acorde con el objetivo constitucional de resocialización. Así, ha realizado sus propuestas de reforma del Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley Orgánica General Penitenciaria y Ley de Seguridad Ciudadana a los gobiernos de turno, propuestas algunas de las cuales han supuesto verdaderos avances hacia la Justicia social en nuestro país.

7.- El Tercer Sector ha sido clave en la crisis sanitaria de la COVID-19 y su papel en la reconstrucción será fundamental.

Esta pandemia ha generado una crisis sanitaria, social y económica que está afectando a toda la sociedad y especialmente a las personas más vulnerables (como personas en riesgo de exclusión social, con problemas de salud, drogodependientes, personas mayores o con discapacidad, infancia, personas inmigrantes y refugiadas, población gitana, entre otras), pero también está generando graves situaciones de vulnerabilidad entre personas que nunca habían necesitado ayuda antes.

Las entidades del Tercer Sector de Acción Social están siendo, desde el primer momento, esenciales en la respuesta a las necesidades de las personas afectadas por la pandemia, demostrando su capacidad y movilizándolo sus propios recursos, incluso cuando los servicios sociales se han visto desbordados, para que nadie se quede atrás.

En España hay 12,2 millones de personas en situación de pobreza o exclusión social y se prevé que esta cifra se vea incrementada de forma exponencial. Las personas que se han visto afectadas por el cierre de empresas, el desempleo o los ERTE, que nunca han estado en riesgo de pobreza y exclusión, están recibiendo nuestra ayuda de forma urgente para cubrir las necesidades más básicas como la alimentación, la vivienda o el pago de suministros. Estas personas deben ser tenidas en cuenta a la hora de desarrollar cualquier plan, ya sea económico, sanitario o laboral y las entidades del Tercer Sector de Acción Social son esenciales en la reconstrucción social del país.

SITUACIÓN DE LAS ADICCIONES Y ACTUACIÓN DE UNAD EN LA PANDEMIA

Durante el estado de alarma, la situación de las personas con adicciones se ha agravado y, ante ello, la red UNAD ha reaccionado de manera activa e inmediata para atajar las consecuencias de las dificultades que han emergido. Esta respuesta ha supuesto adaptarse a las condiciones para continuar con los tratamientos de las personas en situación de calle que se encontraban en dispositivos habilitados y reclamar mayor seguridad para las mujeres en estos espacios, cubrir las necesidades básicas no solo de este colectivo sino también de las familias que se han visto afectadas por ERTE o pérdida del empleo, demandar cumplimientos extrapenitenciarios para las personas reclusas, hacer seguimiento telemático de aquellas que han salido de prisión durante la cuarentena e incluso acogerlas en los recursos de la red. Además, los programas de prevención también han tenido que reinventarse para seguir llegando a la población en un tiempo en el que conductas adictivas como el consumo de alcohol o de psicofármacos o la práctica del juego online se han visto agravadas en el entorno doméstico por el encierro y el estrés generado por la pandemia. Una vez el confinamiento dio paso a la desescalada, todas estas realidades no han mejorado, sino que, debido a la complicación creciente de la realidad sociolaboral, se han agravado. Ante la continuación de este escenario, la actividad de UNAD se ha seguido intensificando para intentar cubrir todas las secuelas derivadas del coronavirus.